



ALCALDÍA DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO LOCAL Y CONVIVENCIA
INSPECCIÓN CONTROL URBANÍSTICO ZONA CUATRO

Medellín, 22 de septiembre del 2021

RESOLUCION No. 021

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA

RADICADO:	2-2213-17
CONTRAVENCIÓN:	Ley 388 de 1997, Modificada Ley 810 de 2003.
CONTRAVENTOR:	Saúl Antonio Henao Villa
INICIADOR:	La Comunidad
DIRECCIÓN INFRACCIÓN:	Carrera 47 No. 109 - 15

La Inspectora de Policía de Control Urbanístico Zona Cuatro de Medellín en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 388 de 1997, modificada parcialmente por la Ley 810 de 2003, y de conformidad con la delegación conferida mediante el Decreto Municipal 1923 de 2001, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y demás normas y circulares concordantes, teniendo en cuenta los siguientes,

HECHOS

Que mediante informe del auxiliar de Inspecciones Alcides Rojas, del 13 de diciembre del 2016, la Inspección Segunda de Policía Urbana, tuvo conocimiento de una construcción ubicada en Carrera 47 No. 109 - 15 de propiedad del señor SAÚL ANTONIO HENAO VILLA en la que al parecer, se estaría adelantando un cambio de techo por losa de un área de 5 metros por 10 metros en el primer piso al parecer vaciada desde el 6 de diciembre de 2016 sin el permiso respectivo de la curaduría, concretamente sin la respectiva licencia de construcción. Que por esta razón la misma inspección emitió orden de policía de suspensión inmediata de la actuación urbanística, la cual se notificó de manera personal al citado (Folios 1 y 2).

Que mediante auto del 1 de febrero del 2017 la Inspección Segunda de Policía Urbana de Primera Categoría, ordena el inicio de las averiguaciones preliminares disponiendo la solicitud a la Subsecretaría de Catastro los nombres y demás datos de los propietarios del inmueble y la citación del presunto responsable para su individualización (Folio 6). Obra en el expediente Oficio 201720034755 en el que se indica que el inmueble con dirección Cra. 047 109 15 del barrio Santa Cruz la Francia es de propiedad del señor SAÚL ANTONIO HENAO VILLA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 98.559.665.





Alcaldía de Medellín

Que la Inspección Segunda de Policía Urbana de Primera Categoría, mediante la Resolución No. 077, calendada del 27 de julio del 2017, inicia un procedimiento sancionatorio y formula cargos al señor SAÚL ANTONIO HENAO VILLA, en calidad de propietario de la construcción localizada en la Carrera 47 No.109-15 endilgándole el siguiente cargo único: *"Realizar presuntamente una construcción de obras sin licencia, en el inmueble ubicado en Carrera 47 # 109-15, de esta ciudad, contraviniendo lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 104 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 2 de la Ley 810 de 2003"*. Dicha decisión fue notificada personalmente al investigado (Folios 12 al 14).

Que mediante escrito del 12 de diciembre de 2017 el señor SAÚL ANTONIO HENAO VILLA, rindió sus descargos manifestando en síntesis que solicitó la licencia de construcción pero por razones ajenas a su voluntad no fue aprobada y debió solicitarla nuevamente. Anexa documento que así lo acredita (Folios 18 al 21).

Que en acatamiento de la Circular Interna No. 201960000080 del 29 de abril de 2019 emitida por la Subsecretaria de Gobierno Local y Convivencia adscrita a la Secretaría de Seguridad y Convivencia, la Inspección 2 de Policía Urbana de Primera Categoría, mediante auto del 3 de mayo del 2019 dispuso la remisión del expediente Radicado 2-02213-17 a la Inspección de Control Urbanístico Zona Cuatro, la que mediante auto del 13 de junio de 2019 fijo un periodo probatorio de diez (10) días, incorporó como pruebas al expediente el informe de visita del auxiliar de inspecciones del 13 de diciembre de 2016 y dispuso solicitar a la Secretaría de Gestión y Control Territorial visita técnica al inmueble.

Que en informe de visita técnica realizada el 11 de julio de 2019 al inmueble por el arquitecto contratista Edwin Rangel Salazar Mosquera adscrito a la Secretaría de Gestión y Control Territorial se indicó: *"(...) se observó una construcción a nivel de sótano de 1 piso donde se cambió techo por losa fácil y se construyó un muro de ladrillo en la fachada, sin la debida licencia urbanística de construcción expedida por curaduría, desatendiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.61.1.1 licencias urbanística; Decreto Nacional 1203 del 12 de julio 2017 licencia de construcción y sus modalidades (...) Observaciones generales: 1. Dirección de la presunta infracción: carrera 47 No. 109-15. 2. Antigüedad de la infracción: 2017. 3. Fuente de información: inspección ocular, cédula catastral, Street view, (google map), Área de la actuación con infracción urbanística: 52.22 m2. Correspondiente a losa de concreto. Avalúo Comercial (según ficha catastral) con CBML: 02050130141 \$10.712.000).6. Responsable de la obra realizada o en proceso de ejecución: Saúl Antonio Henao Villa. Titular del predio (según ficha catastral): Saúl Antonio Henao Villa. 8. Estrato: 1, 9. En el programa Royal del Alcaldía de Medellín no se encontró licencia de construcción para el predio del asunto"*.

Que la Inspección de Control Urbanístico Zona Cuatro, mediante auto del 4 de julio del 2019 dio traslado de las pruebas para los alegatos lo cual fue notificado personalmente al investigado quien en escrito de alegatos del 6 de agosto de 2019 manifestó que inició la construcción sin los respectivos permisos ya que *"el afán de echar la plancha era que por la lluvia todo se me estaba mojando en la casa, por tal motivo me tocó hacer un préstamo y con mucho*



sacrificio lo sigo pagando y después de ese error he tratado de corregir intentando sacar los respectivos permisos y siempre los han negado en curaduría".

Que mediante la Resolución Nro. 256-Z4 del 29 de agosto del 2019, la Inspección de Control Urbanístico Zona Cuatro, impuso sanción de multa al señor SAÚL ANTONIO HENAO VILLA en cuantía equivalente a CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/L (\$14.414.704) y le concedió al mismo señor un plazo de 60 días hábiles para legalizar las obras constructivas obteniendo la respectiva licencia o para volver las cosas a su estado inicial (aportando la respectiva licencia o demoliendo lo construido). Dicha decisión fue notificada en forma personal al sancionado quien formuló recurso reposición resuelto mediante la Resolución 34+-Z4 del 29 de abril de 2020 que confirmó la decisión recurrida.

Que en relación con la sanción de multa impuesta al contraventor se expidió documento de cobro No. 220124445949 del 22 de noviembre de 2019 por valor de CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS (\$14.414.704) por concepto de Multas Urbanísticas R 2-2213-17 29/08/2019 ZONA 04 LEY 388 DE 1997 Ley 388 de 1997 (Folio 51). Que este documento fue anulado mediante la Resolución 13-Z4 del 19 de mayo de 2021 y en su lugar se expidió nuevo documento de cobro No. 220150338910 del 31 de mayo del 2021 por el mismo valor.

Que revisado detenidamente el expediente, el despacho advierte la pertinencia de un pronunciamiento de fondo en el proceso en lo que respecta a la sanción de demolición de que trata el Artículo 2º que modifica el Artículo 104 de la Ley 388 de 1997, en relación con la cual el despacho no se pronunciará al haber operado ya la caducidad de la facultad sancionatoria de la autoridad administrativa policiva para su imposición como así se declarará. Ello en razón de que vencido el plazo de los sesenta días (60) días hábiles concedidos al infractor para la obtención de la licencia de construcción como se había ordenado por este mismo despacho mediante la Resolución No. 256-Z4 del 29 de agosto de 2019, no se dispuso oportunamente la demolición de la misma.

CONSIDERACIONES

Sobre sanción de demolición y de la caducidad de la facultad sancionatoria de la administración

El Artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) que comenzó a regir a partir del 02 de julio de 2012, señala:

"Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. (...) Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior".



Alcaldía de Medellín

Que asimismo el Artículo 239 de la Ley 1801 de 2016, establece que:

“Los procedimientos por contravenciones al régimen de Policía, así como los procedimientos administrativos sustituidos por la presente ley, que a la fecha de la entrada en vigencia de la misma se estén surtiendo, serán adelantados hasta su finalización, conforme a la legislación vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron su iniciación.”

Que está claro que el Procedimiento Administrativo Sancionatorio con el Radicado No. 02-15070-15 y que corresponde al caso sometido a estudio, se inició bajo el régimen jurídico anterior a la Ley 1801 de 2016, debiendo culminarse bajo el trámite administrativo sancionatorio regulado en la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

Que en este orden de ideas, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) en su Artículo 52, indica:

“Artículo. 52.- CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) año contado a partir de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario encargado de resolver. Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se contará desde el día siguiente a aquel en que cesó la infracción y/o la ejecución. La sanción decretada por acto administrativo prescribirá al cabo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de la ejecutoria.”

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO, en Sentencia del 12 de abril de 2018. Radicación número: 25000-23-24-000-2012-00788-01. Actor: ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S. A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - FALLO), sobre el fenómeno jurídico de la caducidad de la facultad sancionatoria, en relación al Artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), hoy Artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), dijo:

“(…) Al respecto, es importante señalar que en tratándose de conductas que afecten o sean contrarias a la libre competencia, esta Corporación ha reiterado en distintas oportunidades que para el cómputo de la facultad sancionatoria de la administración deviene necesario determinar la



naturaleza de los hechos que originan la investigación administrativa, esto es, sin son de ejecución instantánea o sucesiva. Las conductas instantáneas se agotan en un solo momento, en tanto que las de ejecución sucesiva se prolongan en el tiempo, lo que significa que la comisión de la conducta objeto de investigación tiene el carácter de permanente o continuada, de tal suerte que la facultad sancionatoria de la administración debe computarse a partir de la comisión o realización del último acto de ejecución. En efecto, en el evento de investigarse una conducta permanente o continuada, el Consejo de Estado ha sostenido que el término de caducidad para imponer la sanción "comienza a contarse a partir de la fecha en la cual cesa dicha conducta. De allí que en los demás casos, dicho plazo se contabilizará en la forma establecida por el artículo 38 del C.C.A., esto es, desde que el hecho se produce"

Esta misma corporación, como máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ, en Sentencia del 23 de agosto de 2012. Radicación número: 25000-23-24-000-2004-01001-01. Actor: EMGESA S.A. E.S.P. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. Referencia: APELACION SENTENCIA), sobre este mismo tema, señaló:

"(...) Para resolver la controversia, la Sala observa que de conformidad con el artículo 38 del C.C.A., "la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas". Para contabilizar el término de caducidad de la facultad sancionatoria de la Administración, la Jurisprudencia de esta Sección tiene establecido lo siguiente: «Ante las diferentes posiciones e interpretaciones que se le ha dado al tema de la prescripción de la acción sancionatoria, acerca de cuándo debe entenderse "impuesta la sanción", la Sala Plena de esta Corporación con el fin de unificar jurisprudencia sostuvo mediante sentencia de 29 de septiembre de 2009, que "la sanción se impone de manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye la actuación administrativa sancionatoria, que es el acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía gubernativa". Asimismo, sostuvo que "los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser considerados como los que imponen la sanción porque corresponden a una etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea revisado a instancias del administrado. Es, pues, claro, que en los términos del artículo 38 del C.C.A., la Administración debe ejercer la acción encaminada a sancionar personalmente al autor de la infracción administrativa, dentro de los tres (3) años contados a partir de la ocurrencia del hecho. En consecuencia, a partir de esa fecha la Administración cuenta con tres (3) años para proferir la resolución sancionatoria y notificarla al sancionado, independientemente de la interposición de los



Alcaldía de Medellín

recursos». La postura de la Sala, es pues, la de que la sanción se entiende impuesta oportunamente, si dentro del término asignado para ejercer esta potestad, la Administración expide y notifica el acto que concluye la actuación administrativa sancionatoria, independientemente de la interposición de los recursos.

La Honorable Corte Constitucional, en la Sentencia T-211/18 del 01 de junio de 2018. Referencia: Expediente T6.568.722. Acción de Tutela instaurada por la Secretaría de Hábitat de Bogotá en contra de la Sección Primera – Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Procedencia: Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Asunto: Acción de tutela contra providencia judicial que declaro la nulidad de acto administrativo sancionatorio. Defecto por desconocimiento del precedente. Magistrada sustanciadora: GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO), manifestó:

“(…). El desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado en relación con la caducidad de la facultad sancionatoria de las autoridades administrativas prevista en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo -Decreto 01 de 1984-

29.- La jurisprudencia del Consejo de Estado ha expuesto diversas interpretaciones sobre la forma de contabilización del término de caducidad de 3 años previsto en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo -Decreto 01 de 1984- y, específicamente, sobre el momento en el que se entiende ejercida la facultad sancionatoria de las autoridades administrativas. (...) En efecto, las secciones de esa Corporación desarrollaron tres tesis según las cuales, en el plazo en mención y para que no opere la caducidad, las autoridades deben: (i) expedir el acto administrativo sancionatorio; (ii) proferir dicho acto y notificarlo, y (iii) emitir la decisión principal, notificarla, resolver los recursos formulados en su contra y notificar al recurrente. (...) En atención a esa disparidad de posturas, en sentencia del 29 de septiembre de 2009¹ la Sala Plena del Consejo de Estado consideró necesario establecer cuándo se entiende ejercida la facultad sancionatoria y concluyó que en el régimen disciplinario la sanción se impone de manera oportuna si en el término asignado para ejercer esa potestad se expide y notifica el acto que concluye la actuación administrativa, que es la decisión primigenia y no la que resuelve los recursos de la vía gubernativa. (...) Es necesario precisar que dicha sentencia de unificación se emitió en el marco de un proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos y de acuerdo con el término de caducidad previsto en el artículo 12 de la Ley 25 de 1974², modificado por el artículo 6° de la Ley 13 de 1984. (...) Posteriormente, la Sección Primera del Consejo de Estado, tal y como se verá, acogió la sentencia proferida por Sala Plena de esa Corporación como una decisión orientadora y a partir de ese referente fijó un precedente pacífico,

¹ M.P. Susana Buitrago Valencia.

² “ARTICULO 12. La acción disciplinaria prescribe en cinco años contados a partir del último acto constitutivo de la falta.”



reiterado y uniforme, según el cual en el término de caducidad de 3 años previsto en el artículo 38 del Decreto 01 de 1984 la autoridad administrativa debe proferir el acto sancionatorio y notificarlo.

30.- En la sentencia de 9 de junio de 2011³ la Sección Primera estudió el recurso de apelación formulado contra la decisión proferida por la Sección Primera -Subsección B- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado en contra de resoluciones sancionatorias expedidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. (...) En esa oportunidad, dicha autoridad judicial estableció que si bien la sentencia de unificación de 29 de septiembre de 2009 no hizo referencia al artículo 38 del Decreto 01 de 1984, la tesis expuesta por la Sala Plena era pertinente para fijar el alcance de esa norma. Asimismo, señaló que la decisión de los recursos interpuestos contra el acto principal no puede ser considerada como la que impone la sanción porque corresponde a una etapa posterior de revisión de la actuación a instancias del administrado. Por lo tanto, la sanción se considera oportunamente impuesta si dentro del término de tres años se expide y notifica el acto principal.

La sentencia de 23 de febrero de 2012⁴ también estudió una resolución expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y concluyó que ésta se profirió y notificó en el término de tres años previstos en el artículo 38 del Decreto 01 de 1984. (...) La autoridad judicial reiteró los argumentos expuestos en la sentencia de 9 de junio de 2011 y, por ende, señaló que la sanción se considera oportunamente impuesta si dentro del término de caducidad se ejerce la potestad, es decir, se expide el acto y se adelanta la notificación correspondiente.

La sentencia de 14 de febrero de 2013⁵ en la que se decidió la apelación formulada contra la sentencia proferida por la Sección Primera Subsección B del Tribunal Administrativo Cundinamarca, en el marco de un proceso que cuestionaba la legalidad de actos expedidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que sancionaron a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. indicó que, de acuerdo con lo señalado en decisiones previas emitidas por la misma Sección, la caducidad consagrada en el artículo 38 del CCA implica que dentro del término de tres años debe expedirse y notificarse el acto sancionatorio, sin incluir en ese lapso ni la interposición ni la resolución de los recursos.

La sentencia de 28 de agosto de 2014⁶ estudió el recurso de apelación formulado en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado en contra de resoluciones sancionatorias proferidas por la

³ M.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Exp.2004-00986.

⁴ M.P. María Elizabeth García González. Exp. 2004-00344.

⁵ M.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Exp. 2003-91003.

⁶ M.P. Guillermo Vargas Ayala. Exp. 2008-00369.



Alcaldía de Medellín

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. En relación con la caducidad de la facultad sancionatoria de la entidad, la Sección Primera señaló que si bien el juez de primera instancia consideró que los actos administrativos demandados deben ser anulados por haber sido expedidos por fuera del término previsto en el artículo 38 del CCA:

"(...) este criterio resulta equivocado por cuanto desconoce la interpretación que de estas normas ha venido haciendo la jurisprudencia del Consejo de Estado, tanto en sede de unificación de jurisprudencia (sentencia del 29 de septiembre de 2009), como en sus distintas Salas de Decisión, de acuerdo con la cual el cálculo de dicho término debe comprender únicamente la actuación administrativa principal, por lo cual una vez culminada ella con la expedición y notificación del respectivo acto se debe entender impuesta la sanción"

En atención a esas consideraciones, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda.

En el mismo sentido, la sentencia de 29 de abril de 2015⁷ citó la unificación de 29 de septiembre de 2009 y destacó en relación con la caducidad que:

"(...) no sólo es necesario imponer la sanción dentro del término de los tres (3) años en mención, sino que es indispensable que se dé la notificación del acto administrativo que pone fin a la investigación disciplinaria dentro de ese mismo término, a fin de que produzca efectos legales."

Como sustento de esa postura, reiteró que el acto que pone fin al procedimiento y resuelve de fondo el asunto es el que concreta la facultad sancionatoria, con independencia de que el debate continúe si el interesado decide hacer uso de los recursos en vía gubernativa.

En la sentencia de 15 de septiembre de 2016⁸ la Sección Primera del Consejo de Estado estudió los argumentos presentados en el recurso de apelación formulado por la Superintendencia de Puertos y Transporte en contra de la sentencia proferida por la Sección Primera -Subsección B- del Tribunal Administrativo Cundinamarca, en el que indicó que en el caso concreto no había operado la caducidad de su facultad sancionatoria porque emitió el acto y lo notificó en el término de 3 años. En esa oportunidad, el ad-quem concluyó que el recurrente tenía razón, debido a que el 29 de septiembre de 2009, la Sala Plena definió que la sanción queda impuesta oportunamente una vez concluye la actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto principal en el término previsto por la respectiva norma. Asimismo, esa Corporación resaltó que dicho criterio ha sido reiterado de forma sistemática y, por ende, no es justificable su inobservancia.

⁷ M.P. María Elizabeth García González. Exp. 2005-01346.

⁸ M.P. María Elizabeth García González. Exp. 2012-00267.



La postura descrita también se expuso, entre otras, en las sentencias de 8 de mayo de 2014⁹, 29 de septiembre de 2016¹⁰ y 15 de febrero de 2018¹¹ proferidas por la Sección Primera del Consejo de Estado.

31.- Las providencias judiciales referidas previamente dan cuenta de una posición uniforme, pacífica y reiterada de la Sección Primera del Consejo de Estado sobre la interpretación del artículo 38 del Decreto 01 de 1984, en la que se fijó la siguiente regla jurisprudencial: la facultad sancionatoria de las autoridades administrativas no caduca si en el término de 3 años previsto en la norma en mención se expide y notifica el acto administrativo principal.

De otra parte, es necesario resaltar que la autoridad judicial accionada conocía la regla jurisprudencial descrita, pues como se demostró en la línea jurisprudencial reconstruida, las sentencias de 9 de junio de 2011, 14 de febrero de 2013 y 15 de septiembre de 2016 decidieron recursos de apelación formulados en contra de decisiones emitidas por la Sección Primera -Subsección B- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Finalmente, hay que precisar que en el precedente descrito si bien se expone una tesis uniforme sobre la forma de contabilización del término de caducidad, algunas de las providencias tomaron como criterio orientador la sentencia de unificación de 29 de septiembre de 2009 y otras sólo hicieron alusión a la postura reiterada de la sección. Es decir, se estableció una regla de interpretación del artículo 38 del Decreto 01 de 1984, que se construyó desde dos fuentes: el criterio expuesto por la Sala Plena y el reconocimiento de esa postura como la acogida e imperante en la Sección Primera del Consejo de Estado."

Conforme a la línea jurisprudencial emanada por la Honorable Corte Constitucional la figura de la caducidad es:

" ... La institución jurídica de la caducidad se fundamenta en que a la administración, se le impone unas obligaciones relacionadas con el cumplimiento de sus deberes y su no ejercicio dentro de los términos señalados por la ley procesal, constituye una omisión en el cumplimiento de sus obligaciones de naturaleza constitucional. La facultad sancionatoria de la administración, eminentemente reglada, está conformada por principios de legalidad y observancia del debido proceso, que se sintetiza "...como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia, precisando algunos aspectos que determinan y delimitan su ámbito de aplicación inicialmente, destacándose que se trata de un derecho constitucional fundamental, de aplicación inmediata,

⁹ M.P. María Elizabeth García González. Exp. 2010-0003.

¹⁰ M.P. María Claudia Rojas Lasso. Exp. 2004-00370.

¹¹ M.P. Lucy Jeannette Bermúdez. Exp. 2005-01423.



Alcaldía de Medellín

consagrado en el artículo 29 Superior, que le reconoce directa y expresamente ese carácter, y en los artículos 6° y 209 del mismo ordenamiento, en los que se fijan los elementos básicos de la responsabilidad jurídica de los servidores públicos (art. 6°) y los principios rectores que deben gobernar la actividad administrativa del Estado (art. 209). Dentro de ese marco conceptual, la Corte se ha referido al debido proceso administrativo como "(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal". Ha precisado al respecto, que con dicha garantía se busca "(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados." (Sentencias: C-875 del 2011; C-562 de 1997; C-680 de 1998; C-1512 de 2000; C-131 de 2002; C-123, C- 204 de 2003 y C-598 de 2011).

Que en el caso en examen, es evidente que la facultad sancionatoria de la administración ha caducado a la fecha y no es procedente disponer o proveer sobre la demolición total o parcial de la obra ejecutada sin licencia por el contraventor SAUL ANTONIO HENAO VILLA en el inmueble ubicado en la Carrera 47 No. 109-15 del municipio de Medellín.

Veamos, de la infracción urbanística de acuerdo a lo consignado en el expediente, se tuvo conocimiento desde el mes de diciembre de 2016, habiendo transcurrido desde esa fecha al día de hoy casi un cinco (5) años, lo cual evidentemente supera el término de los tres (3) años previstos en el Artículo 52 de la Ley 1437 de 2011 con que contaba administración municipal para ejercer su facultad sancionatoria e imponer la SANCIÓN DE DEMOLICIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA, eso sí, luego de superados los sesenta (60) días hábiles concedidos al sancionado para obtener la respectiva licencia de construcción para adelantar la obra tal y como se había ordenado por este mismo despacho mediante la Resolución No. 256-Z4 del 29 de agosto del 2019. De allí que la oportunidad para la imposición de la sanción haya caducado y no sea procedente al día de hoy imponer la misma y así se declarará.

En mérito de lo expuesto y sin más consideraciones, **LA INSPECCIÓN DE CONOCIMIENTO CONTROL URBANÍSTICO ZONA CUATRO**, en uso de su función de policía y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA de la administración en relación con el PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO tramitado bajo el Radicado No. 2-2213-17 en el que se señaló como contraventor al señor SAÚL ANTONIO HENAO VILLA, identificado con la cédula de ciudadanía No.98.559.665 como responsable de haber ejecutado la obra de construcción localizada en la Carrera 47 No. 109-15 de Medellín sin la respectiva licencia de construcción, pero sólo en lo que respecta a la SANCIÓN DE



DEMOLICIÓN (Artículo 2°, Numeral 3° de la Ley 810 de 2003, modificatorio del Artículo 104 de la Ley 388 de 1997 y Artículo 52 de la Ley 1437 de 2011). La **SANCIÓN DE MULTA** impuesta al contraventor mediante la Resolución No. 256-Z4 del 29 de agosto del 2019 permanece incólume y con plenos efectos jurídicos para su ejecución a través del cobro coactivo a que haya lugar para su recaudo.

ARTÍCULO SEGUNDO: INDICAR que la decisión adoptada en el **ARTÍCULO PRIMERO** de la parte resolutive de este proveído, no es óbice o justificación para que el señor **SAÚL ANTONIO HENAO VILLA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 98.559.665 se acoja a las previsiones establecidas en el Artículo 99 y siguientes de la Ley 388 de 1997, y demás normas concordantes sobre la materia, obteniendo la respectiva licencia de construcción en cualquiera de las Curadurías Urbanas de la ciudad de Medellín o volviendo las cosas a su estado inicial, en lo que tiene que ver con el comportamiento reglado en el Artículo 2°, Numeral 3° de la Ley 810 de 2003, modificatorio del Artículo 104 de la Ley 388 de 1997.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE esta decisión en los términos establecidos en los Artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, al señor **SAÚL ANTONIO HENAO VILLA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.15.272.865.

ARTICULO CUARTO: SEÑALAR que contra la presente **RESOLUCIÓN PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN** dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación personal, por aviso, o al vencimiento del término de publicación según el caso, presentado y sustentado por escrito ante esta autoridad de policía (Artículo 74, 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO QUINTO: Archivar este Procedimiento Administrativo Sancionatorio tramitado bajo el Radicado No. 02213-17, una vez notificada, ejecutoriada y ejecutada en lo pertinente la presente decisión, realizando las anotaciones de rigor en el Sistema Theta administrado por la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín.

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE


MARIANA ORJAS GIRALDO
Inspectora


MAURICIO GONZALEZ LOPEZ
Secretario

